

Las razones de los desalojados

En el número de diciembre (1974), SIC recogía el informe de Rito Alvarez y Adonis Dáger sobre la situación deplorable de los desalojados en Caucaquito. Se indicaba que ni la improvisación y mucho menos el escamoteo solucionan los conflictos.

En efecto, se pretendió eliminar hábilmente el conflicto de los desalojados con operaciones como la de Caucaquito. Instantáneamente se hacía desaparecer del mapa un barrio para esconderlo en una región desconocida donde no perturbara la visión de los bien instalados y de los turistas.

Tal vez se pensaba que con la política del avestruz se eliminaban los problemas urbanos y las molestias que ocasionaban los desalojados.

Posteriormente SIC en sus "comentarios" de marzo denunció la modalidad como se efectuó el desalojo en el Calvario, combinando la guerra psicológica, la amenaza y aun el engaño.

Actualmente, como las lluvias no esperan el ritmo de los programas de ordenamiento y de las promesas presidenciales (Decreto No. 332), los barrios amenazados han tenido que organizarse para defender sus derechos.

El 16 de abril, 300 personas de Trapichito y del 23 de Enero ocupaban el Consejo de Caracas para reclamar el pago de bienhechurías. Señalaban que la Gobernación se comprometió a cancelar la cuota inicial de las viviendas como de las bienhechurías y que el Banco Obrero amenazaba con desalojarlos porque no había recibido dinero.

Esta acción fue respaldada por 49 barrios, unidos en comités de defensa, en una asamblea realizada el 6 de abril. SIC considera un deber el dar a luz pública este documento sobre las razones que asisten a los barrios marginados de Caracas.

I PARTE

LAS COMUNIDADES DE LOS BARRIOS ANTE EL PROBLEMA DE LOS DESALOJOS

Las comunidades de los barrios nos hemos visto enfrentados a toda una arremetida del Gobierno Nacional con relación a la política de los desalojos que éste adelanta con todos los recursos oficiales centralizando esta política en un organismo integrado por todos los cuerpos policiales, militares y organismos oficiales: P.M., G.N., Bomberos, Banco Obrero, Inos, Fundacomún, Gobernación, Juntas Comunales, etc. Utilizan todos los recursos de la propaganda oficial y comercial. Un comando máximo dirige las operaciones y todo esto, respaldados por algunas tesis urbanísticas y de desarrollo económico, que desde hace algunos años vienen discutiendo algunos teóricos de las clases dominantes.

Desalojos de los barrios que tratan de justificarse con distintos argumentos: se desaloja por la peligrosidad de las tierras; se desaloja para "recuperar las zonas verdes o pulmones de Caracas"; se desaloja para descentralizar a Caracas, presuntamente del pueblo; etc. En fin, distintos argumentos que pretenden esconder el fondo real del problema: INTERESES ECONÓMICOS DE LOS RICOS DE ESTE PAÍS. Intereses económicos que reclaman la tenencia y propiedad de la tierra para explotar con sus negociaciones, ya que la tierra ha sido fuente principal de la riqueza de la mayoría de capitales venezolanos, y la tierra de la parte plana de Caracas hace tiempo que se acabó. Intereses económicos que de forma irresponsable quieren acabar con el problema de la pobreza y la marginalidad de las gran-

des ciudades de Venezuela (se está desalojando también en ciudades como Maracaibo y Barcelona), ocultando la pobreza y trasladando el problema hacia el interior, sin darle soluciones verdaderas. Intereses económicos que pretenden una ciudad turística, la Caracas limpia de ranchos y buhoneros a costa de la destrucción y desarticulación de las familias humildes. Intereses económicos que de forma hábil, como las clases dominantes manejan estas cosas, tratan de ir garantizando, para sus planes a largo plazo, la mano de obra barata que necesitarán en el interior para las empresas mixtas que les interesan a los capitales americanos (yankis), sin importarles la forma en que esas familias arrancadas del sistema de vida, que se han creado con dificultad en las ciudades pero que les permite mal vivir siquiera, se las arreglarán durante los varios años, que faltan para esas tales empresas mixtas, para comer y alimentar a sus hijos.

Sin embargo, a casi 8 meses de haber comenzado los desalojos en los barrios, aprovechándose la Gobernación de los derrumbes suscitados en las tierras de la parte baja de Isaías Medina (Tamaquito, Mara) y de la Morán, La Silsa, etc., hemos podido constatar algunas cosas generales:

a) Aparentemente no existe una planificación completa y total para los desalojos de los barrios caraqueños.

b) También aparentemente, la iniciativa de esta primera etapa la llevó la Gobernación con Diego Arria, apoyado directamente por el Presidente C.A.P., sin un programa que respondiera de verdad a lo que el Gobierno pretendía, pero siguiendo los lineamientos que ya manejaba Diego Arria hace años desde su puesto de directivo de la Conahothu, empresa de las primeras interesadas en los desalojos, por sus planes urbanísticos-turísticos.

II PARTE

Por otra parte, los habitantes de los barrios apenas comenzamos a reaccionar de la sorpresa de todos estos acontecimientos, que han destruido nuestro sitio de vivienda e incluso nuestra familia. Estamos anonadados por la magnitud de la tragedia y por lo poderoso del enemigo que enfrentamos (en este caso el Gobierno que representa a las clases dominantes, los ricos del país, y que para la mayoría de los habitantes de los barrios, muchos de ellos recién llegados del campo, representa el poder y la autoridad que todo lo puede). Estamos divididos en pequeñas parcelas que son los barrios y acostumbrados a una lucha localista que no nos ha desarrollado la conciencia de la necesidad de unión de fuerzas y de solidaridad inter-barrios. Esto no nos permite darnos cuenta a cabalidad, que este es un problema que nos afecta a todos por igual, a todos los habitantes pobres de los barrios.

Por la distancia entre un barrio y los otros y por todo lo antes mencionado, tenemos grandes dificultades de unir esta gran masa, pese a lo mucho que realmente ha repercutido el problema de los desalojos en ellas. Vemos también que el desarrollo de los barrios no es parejo: existen barrios con tradición de lucha como La Silsa (sus primeros sectores), 23 de Enero y otros, donde sus habitantes han probado en otras ocasiones su fuerza como clase necesitada y como mayoría pobre que somos y, por lo tanto, conocen sus derechos y es más fácil su organización, mientras existen otros barrios donde muchos de sus habitantes afectados aún no han terminado de comprender todo este problema y todavía tienen confianza en encontrar la solución a través de los organismos oficiales, sin darse cuenta de que sólo en la unión de los barrios y en la defensa firme de sus derechos está esa solución. Sin embargo, por otra parte, puede darse una cuenta hasta qué punto afecta en lo profundo el problema de los desalojos a la familia humilde de los barrios, golpeándonos y destruyendo nuestra forma de vida y nuestros hogares. Más aún, cuando una gran parte de nosotros puso su confianza, una vez más, durante las pasadas elecciones en el actual partido de gobierno, para ver también, una vez más, defraudadas todas nuestras esperanzas, vemos que quienes destruyen irresponsablemente el esfuerzo de muchos años de muchas familias en levantar poco a poco nuestros hogares y nuestros barrios (a fuerza de lucha, ya que la poca ayuda oficial lograda era a costa de nuestra insistencia) son precisamente las autoridades elegidas por nosotros las que nos ofrecen como única solución trasladarnos al interior, sin garantía de trabajo, escuela y otras necesidades. O nos ofrecen programas de vivienda inhumanas tipo Caucagüita o Tacagua. O sea, sin darnos, en general, a la familia trabajadora venezolana ninguna garantía mínima. Todo esto ha golpeado aún más a las familias de los barrios e incluso a densos sectores de la población media que se sensibilizan ante la gravedad del problema, por el hecho de conocer todas las fabulosas entradas extras de dinero, que este año hemos tenido por concepto de petróleo, y la gran propaganda gubernamental en torno a sus planes de desarrollo nacional, (los famosos 42 mil millones de Bs), desarrollo que evidentemente ellos no piensan hacer llegar al pueblo, sino que se quedará en los eternos grupitos chupadores de familias de los ricos, llegando al extremo de mandar para el extranjero ostentosos préstamos, cuando al país confronta los muchos problemas de todas clases que tenemos.

III PARTE

Todo este problema ha hecho, que los habitantes de los barrios comencemos poco a poco a comprender la necesidad de unirnos y organizarnos para poder enfrentar este problema que

(Sigue en la pág. 240)



c) Es evidente también que en el problema de los desalojos hay fuertes contradicciones y distintos intereses económicos entre los distintos grupos y sectores; sin embargo, ante el punto en común de querer desalojar los barrios, tienden a unificar sus criterios y acciones (su política).

d) Por otra parte, se manifiestan contradicciones de mando entre ciertos organismos oficiales y el Gobernador y su grupo; entre el Gobernador y el partido de gobierno; entre el partido de gobierno y el Presidente que respalda al Gobernador; entre éstos y los grupos económicos interesados en cobrar el apoyo prestado al partido de gobierno durante las pasadas elecciones.

e) Se observa sin embargo, cierta tendencia a ir preparando una arremetida más fuerte y mejor planificada para estos meses del año.

f) Se puede observar la contradicción evidente entre las cifras oficiales de futuros desalojos y de viviendas en construcción: se habla de desalojar para este año 300 mil personas (más o menos 90 mil familias) de los barrios Federico Quiroz, La Silsa, La Morán, 23 de Enero, Antimano, San Agustín y Gramóven, sin contar los damnificados de verdad que se producirán en otros barrios por las lluvias. B. O. dice que su ritmo actual de construcción de viviendas es de 40 mil. Datos estos, dados en la interpretación que la Comisión de asuntos sociales del Congreso le hizo al Director del B. O. Se habla de que las casitas de cartón son provisionales, dando un año como plazo para transformar las casitas de Caucagüita y Tacagua en planes de vivienda similares a Barrio Kennedy para Caracas y la zona Metropolitana y de tipo rural para el interior. Pero, por la cifra y capacidad real de construcción, ese programa no lo cubrirán ni en 15 años.

(Viene de la pág. 199: Las razones de los desalojados)

nos afecta a todos por igual, haciendo movilizaciones y realizando campañas de denuncia ante los medios de comunicación.

Sin embargo, observamos que aún son dispersas y débiles estas movilizaciones, mientras que el Gobierno centra al máximo sus fuerzas y arremete con todas ellas, no sólo para utilizarlas, sino para aprovechar al máximo toda la impresión que produce, que es tal que a veces pareciera que estuviesen tomando una ciudad enemiga, en lugar de un desalojo de un barrio. Mientras que el Gobierno y muy en especial el Sr. Gobernador desarrollen toda una campaña tratando de justificar ante la opinión pública los desalojos, llegando incluso a denigrar de la moral de la familia humilde venezolana, los barrios aún no hemos comprendido totalmente la necesidad de que esas movilizaciones, espontáneas hasta ahora, sean producto de la coordinación y organización de todos nosotros. Es necesario que unamos fuerzas todos los habitantes de los barrios que, como somos numerosos, somos un poder contra quien no podrá impunemente seguir atropellándonos. Es necesario también que estas campañas de denuncia contra los desalojos expresen un criterio de verdad, producto de la discusión y acuerdo de todos los barrios. Mientras las comunidades sigamos enfrentando aisladamente este problema, no seremos capaces de hacer valer nuestros derechos de venezolanos y de seres humanos, ni seremos capaces de hacer respetar la gran fuerza que somos los habitantes de los barrios.

Se hace necesario insistir en que todos los barrios caraqueños somos igualmente afectados, tanto los amenazados con desalojos como los que no sabemos en qué momento nos llegará la condena. Tenemos informaciones concretas de que el problema de los desalojos ahora es cuando está comenzando, que el Gobierno y los ricos tienen planificado para este año una segunda y más fuerte etapa de desalojos. Cosa ya comenzada en el km 2 de la carretera Panamericana (barrio La Montañita), El Calvario, parte de la Roca Tarpeya y diariamente van sacando poco a poco la parte baja del sector Nueva Esparta (Gramovén). Desalojos, estos últimos, que se caracterizan por más represivos y de presión; como fue el caso de La Montañita, donde quemaban los ranchos para que las familias atemorizadas salieran "voluntariamente". Otros barrios amenazados últimamente son: Camboya, Santa Rosa (23 de Enero); San Agustín y toda la fila de Gramovén. Frente a esta nueva arremetida debemos estar unidos y preparados para enfrentarla (movilizaciones de gente, organizaciones de comités de defensa contra los desalojos en cada barrio, y, un programa único de exigencia que represente de verdad los problemas de todos).

Pese a que cada barrio tiene sus características particulares, el problema de los desalojos es el mismo y uno solo y tiene, por lo tanto, igual repercusión y lo originan las mismas causas. Es por eso por lo que los integrantes de los comités de defensa que abajo firmamos y que hasta el momento hemos logrado unificar puntos de vista y programas de acción, partiendo del respeto mutuo y de la independencia de cada comité (unidos en la lucha, pero sin pretender ninguna imposición ni control de otro tipo), tratamos con este documento de tomar la iniciativa, para intentar promover discusiones del problema de los desalojos en todos los barrios caraqueños y que de allí surja la coordinación y unión de esfuerzos necesaria para poder enfrentar a tan poderoso enemigo que tenemos.

A continuación planteamos algunas de las exigencias que hemos presentado distintos barrios a los organismos oficiales, en nuestra lucha contra los desalojos, con la misma intención de discusión y objetivo: de que de ella salga un programa único de exigencias de todos los barrios, con el aporte de todos:

1. Cese de los desalojos (salvo en casos de comprobada peligrosidad) hasta tanto las autoridades no construyan viviendas

que reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad y se maneje el problema con un criterio de reubicación, no de desalojo.

2. Municipalización de las tierras de los barrios.

3. Pago de las bienhechurías de las familias desalojadas.

4. Rebaja de las viviendas que B.O. está adjudicando a los damnificados y desalojados, por considerar que no están al alcance real de estas familias y considerar la situación especial y no voluntaria de sus casos.

5. Rechazo a los programas de vivienda tipo Caucagüita-Tacagua por considerarlo inhumano e inhabitable. Además, Venezuela cuenta con suficientes recursos económicos como para realizar un verdadero programa de vivienda al alcance de los sectores populares.

6. Rechazo a los traslados irresponsables al interior y ubicación de las familias damnificadas y desalojadas en los apartamentos desocupados que B.O. tiene en distintas partes de la zona metropolitana (Son miles de apartamentos. La ubicación de ellos de las familias afectadas será provisional, mientras les construyan viviendas módicas y con las condiciones mínimas de habitabilidad necesaria).

7. Aquellas familias que de forma voluntaria acepten irse para el interior, se les debe garantizar trabajo fijo, vivienda, escuela para sus hijos y los servicios públicos necesarios.

8. No desalojos sino reubicación, partiendo de un estudio previo de la seguridad de los sueños; dando un plazo prudencial para que las familias de los barrios que necesiten ser reubicadas por la peligrosidad, se preparen para el cambio; eliminación de la represión y la violencia en el tratamiento de estos problemas, ya que la reubicación debe tener un carácter constructivo, y los afectados, salvo casos aislados, son ciudadanos trabajadores venezolanos y no vulgares delincuentes.

9. En los barrios donde no existe peligrosidad evidente y que por sus condiciones de no hacinamiento extremo puedan ser remodelados, comenzar desde ya una campaña intensiva, para dotarlos de inmediato de sus servicios públicos (especialmente cloacas y embalsamiento de quebradas, para evitar derrumbes), escuelas, carreteras, etc.

10. Tratar de reubicar a las familias damnificadas y desalojadas en el área donde tienen ya organizada su vida: escuela para sus hijos, trabajo, etc., ya que el traslado irresponsable de las familias hacia el interior y en sitios donde no se les garantice la solución inmediata de sus problemas, sólo contribuye a crear conflictos.

11. Planificar para un futuro, lo más próximo posible, un programa de dotación de viviendas amuebladas en el costo del apartamento, verdaderamente a su alcance.

12. Eliminación de la tabla mínima de ingresos mensuales que B.O. exige para otorgar las viviendas (Bs. 1.200 para las casitas; y Bs. 2.000 para los apartamentos) por considerar que cada 100 familias que viven en los barrios, si acaso 10 llegan al promedio de Bs. 1.200 mensuales. Debe privar la tasa mínima del 10% del ingreso familiar para el pago de las viviendas.

13. Considerar, entre las soluciones al problema de la vivienda de los sectores populares, un programa de crédito familiar en aquellos barrios que reúnan condiciones de remodelación y desarrollo. También en esto debe privar la misma tasa de pago mencionada anteriormente.

Por los COMITES DE DEFENSA
CONTRA LOS DESALOJOS de los Barrios:

20 de Mayo, Isaías Medina, Sector 5, Lomita, Las Torres, Tamaquito, Nuevo Horizonte, Mulatal, Oropeza Castillo, Federico Quiroz, Trapichito, Caucagüita, Papelón, El Carmen, Niño Jesús, Observatorio, Pinto Salinas.

(En la Asamblea del 6 de abril se sumaron los comités de otros barrios hasta completar 49)